

Departament d'Economia Aplicada

Recursos naturales y desarrollo en el
Chad: ¿maldición de los recursos o
inscripción periférica?

Artur Colom-Jaén

D
O
C
U
M
E
N
T

D
E
T
R
E
B
A
L
L

12.02



Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat d'Economia i Emp

Aquest document pertany al Departament d'Economia Aplicada.

Data de publicació : **Gener 2012**

Departament d'Economia Aplicada
Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra

Telèfon: (93) 581 1680
Fax:(93) 581 2292
E-mail: d.econ.aplicada@uab.es
<http://www.ecap.uab.es>

Recursos naturales y desarrollo en el Chad: ¿maldición de los recursos o inserción periférica?¹

Natural resources and development in Chad: resource curse or peripherical insertion?

Artur Colom-Jaén

Departamento de Economía Aplicada, UAB

artur.colom@uab.cat

Resumen

El significativo incremento de las inversiones extranjeras en el sector extractivo africano en la última década, ha hecho renacer el debate acerca de los efectos sobre el desarrollo de las rentas generadas por este sector. Desde la teoría de la maldición de los recursos se argumenta que los efectos negativos sobre el desarrollo de estas rentas tienen que ver básicamente con disfunciones internas, soslayando los elementos y actores externos que dan forma e influyen en éstas. El caso del Chad, país productor de petróleo desde 2003 con el apoyo del Banco Mundial, es presentado y analizado en este artículo, llegando a la conclusión de que el análisis de la inserción periférica es crucial para comprender las disfunciones generadas por la renta petrolera en el país.

Palabras clave: Recursos naturales, maldición de los recursos, Chad.

Abstract

The significant increase in foreign investment in the African extractive sector in the last decade has refuelled the debate on the effects on development of the rents generated in this sector. From the resource curse theory, it is argued that the negative effects on development of these rents have to do basically with internal disfunctions, getting around the elements and external actors that shape and influence these internal features. The case of Chad, an oil-producing country since 2003 with the support of the World Bank, is presented and analysed in this article, and we reach the conclusion that the analysis of the peripherical insertion of the country is crucial to understand the disfunctions generated by oil rent.

Keywords: Natural resources, resource curse, Chad.

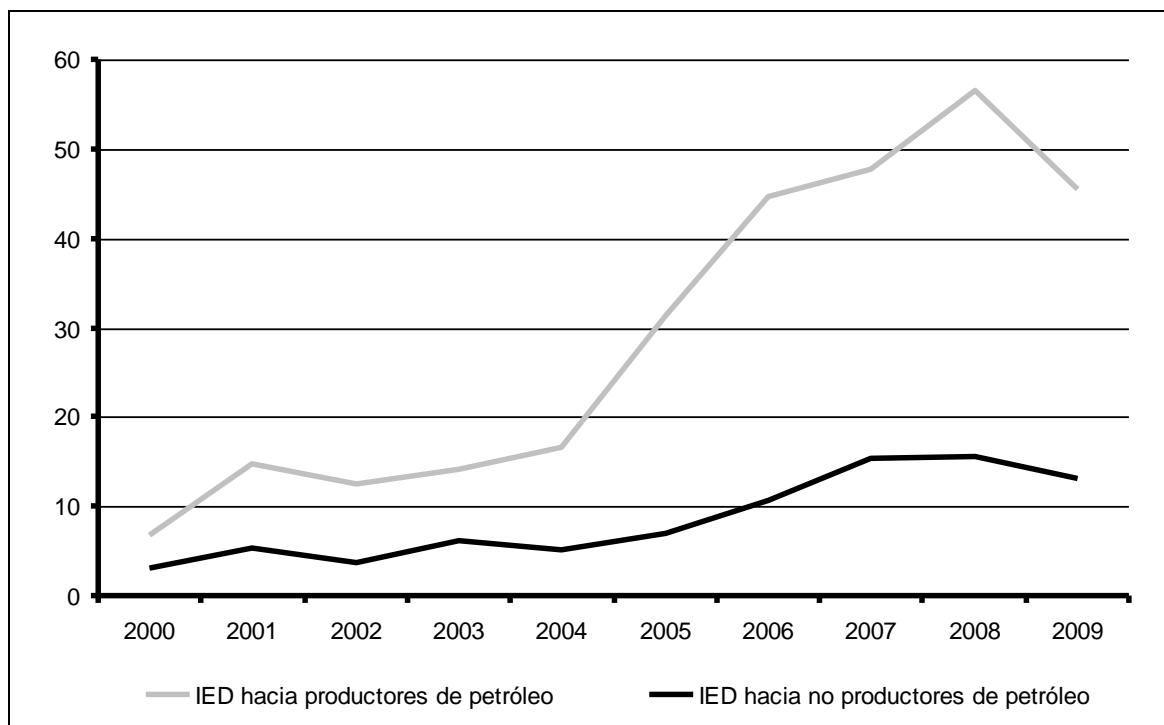
Clasificación JEL: O55; Q34.

¹ Una versión anterior de este artículo fue presentada en la XII Reunión de Economía Mundial de 2010 en Santiago de Compostela.

1. Introducción

Desde los tiempos de la colonia, la explotación de los recursos naturales en África² es crucial para comprender la economía política del continente, así como la economía política internacional. En la última década, la tradicional corriente de Inversión Extranjera Directa (IED) que fluye al continente ligada a la explotación de recursos naturales se ha visto reforzada. A modo de ejemplo, veamos como en el Gráfico 1 se aprecia que los países africanos productores de petróleo han recibido en los últimos años un monto significativamente creciente de IED.

GRÁFICO 1: ENTRADAS DE IED EN ÁFRICA (2000-2009), MILES DE MILLONES DE \$ CORRIENTES



Fuente: elaboración propia a partir de datos de UNCTADstat.

Las razones que explican este incremento de las entradas de IED relacionadas con los recursos naturales tienen que ver con: a) el incremento de los precios de ciertas *commodities*, particularmente el petróleo; b) la creciente demanda procedente de economías emergentes, como China o India; c) el despliegue de nuevas estrategias geopolíticas de aprovisionamiento energético de EEUU; d) los notables progresos que ha experimentado la tecnología de la prospección y la extracción de determinados minerales, que permiten descubrir y poner en valor yacimientos que anteriormente no tenían valor comercial por su dificultad de acceso; y e) cambios orientados a la liberalización en el marco regulador de la IED en muchos países, que facilita la entrada de Empresas Transnacionales (ETN), que de hecho son las protagonistas de este incremento en la IED destinada al sector extractivo.

² En este artículo usaremos metonómicamente “África” para referirnos al África subsahariana.

En la literatura especializada, se habla abiertamente de “un nuevo reparto de África” (*a new scramble for Africa*), parafraseando el concepto histórico de “reparto de África” (*scramble for Africa*), habitualmente usado para describir el proceso de invasión, ocupación y colonización europeas de África que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta el inicio de la primera guerra mundial. En la medida en que los recursos naturales fueron claves en aquel momento para explicar aquel proceso de expansión imperialista, no faltan los paralelismos entre aquel proceso y el actual (Carmody, 2011; Melber y Southall, 2009).

En muchos casos, esta entrada de IED en África ha tenido lugar en países clasificados como Países Menos Avanzados (PMA). Así, el viejo debate acerca de las consecuencias en términos de desarrollo de la explotación de recursos naturales en el continente vuelve a cobrar protagonismo en la literatura especializada en virtud del indiscutible aumento cuantitativo de las inversiones en este sector en África.

La República del Chad, en el África Ecuatorial, no ha escapado a estos fenómenos, y desde 2003 forma parte del club africano de exportadores de petróleo gracias a la mayor inversión privada de la historia del África subsahariana, llevada a cabo básicamente por empresas occidentales con el apoyo del Banco Mundial (BM). Lo que tenía que ser una gran oportunidad para el desarrollo y la reducción de la pobreza en el Chad según los proponentes del proyecto, ha acabado teniendo efectos muy limitados sobre la pobreza y el desarrollo, y ha reforzado el autoritarismo preexistente en el país. Además, en 2008 el BM se retiró del proyecto, admitiendo que no se habían cumplido sus expectativas. En este artículo buscamos describir y analizar el proyecto petrolero del Chad a través de la óptica de la teoría de la maldición de los recursos, el marco teórico más ampliamente usado para estudiar los efectos de la explotación minera en países en desarrollo. Como veremos, para el caso del Chad dicha teoría no analiza adecuadamente los factores externos, como el papel de las ETN, y soslaya la importancia de la inserción periférica del país en la economía mundial, factores que han acabado siendo clave para entender la evolución del proyecto petrolero. En la sección que sigue se exponen los diferentes enfoques y versiones de la teoría de la maldición de los recursos, señalando también sus limitaciones; en la tercera sección se ofrece una panorámica analítica de los hechos estilizados del proyecto petrolero; en la sección cuarta se ofrecen algunas lecturas del caso del Chad confrontándola con la teoría de la maldición de los recursos; y en la sección final se señalan las conclusiones.

2. La teoría de la maldición de los recursos y sus límites

Dentro de la corriente principal de la literatura especializada, los recursos naturales gozan de mala reputación. Con pocas excepciones, el impacto sobre el desarrollo y el crecimiento de la explotación de recursos naturales en países en desarrollo es percibido en la literatura al uso de manera pesimista. Bajo la denominación “teoría de la maldición de los recursos” (*resource curse theory*), se agrupan las aportaciones que pretenden describir y dar explicación analítica a este fenómeno.

2.1 La enfermedad holandesa

Es el trabajo seminal de Sachs y Warner (1995) el que da pie a la aparición de numerosos estudios sobre esta cuestión y con este enfoque pesimista. En este trabajo, estos autores observan empíricamente que los países con una elevada ratio de exportaciones de recursos naturales en relación a su PIB en 1971, tuvieron un crecimiento anormalmente bajo entre 1971 y 1989. En esta misma línea, el BM (2002) reforzó el enfoque concluyendo tras otro trabajo empírico que los países con un sector minero importante (exportaciones por encima del 50% del PIB), experimentaron un declive medio del PIB per cápita del 2,3% anual durante los años 90.

Sin embargo, con anterioridad a estos trabajos ya se había desarrollado desde la macroeconomía el enfoque de la denominada “enfermedad holandesa” (*Dutch Disease*), fenómeno consistente en la continua apreciación del tipo de cambio real inducida por la entrada masiva de divisas, típicamente como consecuencia de la exportación de un recurso natural³. Dicha apreciación tiene como efecto la pérdida de competitividad exterior relativa de los sectores económicos que producen otros bienes transables, ya que sus precios relativos empeoran *vis-à-vis* el resto del mundo. En la medida en que normalmente esto acontece en los sectores industriales, ya que son los que producen los bienes más fácilmente transables, el fenómeno de la “enfermedad holandesa” suele asociarse a un riesgo de desindustrialización. Por eso este fenómeno también es conocido como una versión del “efecto expulsión” (*crowding-out*), en el que un sector “expulsa” al resto, en este caso a través del tipo de cambio. A nivel teórico, la tesis de la “enfermedad holandesa” es una consecuencia del modelo de Heckscher-Ohlin, fundamentado en un enfoque neoclásico y estático (Corden y Neary, 1982).

Los efectos macroeconómicos estáticos de la “enfermedad holandesa” pueden ser contrarrestados por políticas industriales activas de medio o largo plazo en favor de los sectores afectados negativamente por ella. Por ejemplo, una política que encamine una parte del excedente de divisas a intensificación tecnológica que permita añadir más valor a la industria afectada y compensar así su pérdida de competitividad provocada por el cambio de los precios relativos puede ser una posible salida. Por otra parte, la esterilización monetaria de la entrada masiva de divisas también forma parte del abanico de soluciones habituales ante la “enfermedad holandesa”. Así, muchos de los Fondos Soberanos de Inversión (*Sovereign Wealth Funds*) existentes y tan relevantes en la economía global actual, tienen su origen en políticas de esterilización monetaria para contrarrestar macroeconómicamente la entrada masiva de divisas originadas por la venta de petróleo, en otras palabras, para frenar la “enfermedad holandesa”. Tal es el caso del *Government Pension Fund-Global* de Noruega, el *National Fund* de Kazajistán, o el *State Oil Fund* de Azerbaiyán, por citar sólo unos cuantos (IMF, 2011:4). También este fue el caso del ya desaparecido *Fonds pour les Générations Futures* del Chad.

Estos argumentos macroeconómicos dejan de lado la importancia de la fortaleza de las instituciones encargadas de dirigir estos fondos. Como

³ Esta teoría recibe su nombre a partir de un artículo publicado en *The Economist* en 1977 en el que se explican los problemas de las exportaciones holandesas no relacionadas con el gas tras el descubrimiento y extracción de enormes cantidades de gas natural en alta mar (*The Economist*, 1977).

veremos, para analizar las dinámicas socioeconómicas asociadas con la explotación de recursos naturales, hay que tomar en consideración las dimensiones políticas de la gestión de las rentas. A ello se dedica otra gran familia de enfoques de la teoría de la maldición de los recursos, que centra su análisis en los factores institucionales y de comportamiento que se encuentran en la base de los efectos negativos sobre el desarrollo de las rentas procedentes de la explotación de recursos naturales.

2.2 El modelo del “estado rentista”

El modelo del “estado rentista” (*rentier-state*) o de la “paradoja de la abundancia” (*paradox of plenty*), mantiene que el bajo crecimiento que se observa en países con abundancia de recursos naturales se debe a que la existencia de una renta externa para el gobierno generaliza el despilfarro en la administración pública, la corrupción y los comportamientos de búsqueda de rentas fuera de las actividades productivas (*rent-seeking*). Esta estructura de control de las decisiones incentiva el despliegue de dinámicas específicas de tipo económico y sociopolítica, donde el enriquecimiento personal y la preservación del poder de las élites en el gobierno prevalecerían sobre los objetivos colectivos políticos, como el desarrollo y el bienestar colectivo (Karl, 1997 y 2005; Mahdavy, 1970; Beblawi y Luciani, 1987; Yates, 1986)⁴. Cabe señalar que la teoría soslaya la contradicción existente entre el objetivo de preservación del poder y el comportamiento predatorio. Las condiciones bajo las cuales las motivaciones predatorias dejan en segundo plano los objetivos de desarrollo no quedan claras en este enfoque (Di John, 2011: 175).

Por otra parte, la teoría del estado rentista también mantiene que, independientemente de cómo un gobierno asigna los ingresos por rentas procedentes de recursos naturales, si dichas rentas aportan una base fiscal suficiente al gobierno, de modo que éste no tiene necesidad de imponer exacciones fiscales a la ciudadanía, el contrato social entre ésta y el gobierno se debilita. En la medida en que un gobierno no tiene necesidad de responder a las demandas de la ciudadanía, los controles del gasto público se vuelven más laxos, y la ciudadanía difícilmente puede ejercer controles sobre la acción pública (Ross, 1999; Gould y Sickner, 2008)⁵.

Sin salirnos de este marco institucionalista de análisis, encontramos la “teoría del ciclo de la renta” (*rent-cycling theory*) de Richard Auty. En ella se argumenta que la existencia de una renta externa elevada desincentiva el gobierno para que dedique esfuerzos a la creación de riqueza y redistribución de la renta, orientando dichas rentas hacia el patronazgo político, distorsionando la economía, deprimiendo la eficiencia en la inversión y causando finalmente un colapso en el crecimiento. Por otra parte, esta teoría sostiene que la recuperación de un colapso de crecimiento se retarda debido a

⁴ En este contexto, por *renta* se entiende un ingreso que no procede de actividades productivas, sino que se obtiene simplemente por el hecho de poseer un activo, en este caso recursos naturales.

⁵ En este artículo nos estamos refiriendo exclusivamente a los recursos naturales como origen de las rentas externas, pero estilizadamente hay autores que atribuyen a las transferencias de recursos dentro del sistema internacional de cooperación al desarrollo las mismas propiedades que las rentas de origen mineral (Harford y Klein, 2005).

la inercia del “ciclo de la renta”. Además, según este enfoque, los efectos negativos de una renta externa elevada son amplificados cuando la mayor parte de la renta la reciben los gobiernos, éstos exhiben una ideología desarrollista, y existe diversidad étnica (Auty, 1993 y 2008).

2.3 Recursos y conflictos armados

Por último, y todavía dentro de este enfoque pesimista, cabe citar las teorías que establecen una correlación entre abundancia de recursos y conflicto. Los conocidos trabajos de Paul Collier y otros expertos, han intentado poner de relieve el papel de la búsqueda de rentas (*rent-seeking*) en presencia de minerales (petróleo o diamantes por ejemplo), en algunas guerras contemporáneas en África. Según estos autores, la extracción de recursos minerales aumentaría la probabilidad de generación y persistencia de los conflictos violentos a través del comportamiento predatorio de políticos y guerrilleros, que verían en el conflicto armado un modo de acceso a mercados y recursos, que en situaciones de paz y pobreza no tendrían (Collier y Hoeffler, 1998). En este marco de análisis, se supone que los potenciales rebeldes calculan racionalmente los costes y los beneficios del conflicto armado, dejando en un segundo plano la ideología o el modelo de sociedad que inicialmente les impulsa. En el conocido debate “¿Codicia o agravio?” (*Greed or grievance?*), estos autores tienden a ver a los potenciales rebeldes como predadores racionales, impulsados por el afán de lucro, dejando de lado otras motivaciones. En este contexto, el conflicto violento necesita también “medios” (*means*) y oportunidad (*opportunity*). La organización, el despliegue y el mantenimiento de ejércitos o guerrillas es caro por definición, pero la posibilidad de acceder a recursos naturales como el petróleo, el coltán o los diamantes crea las oportunidades de generación del ingreso necesario para financiar dichas estructuras militares (Collier y Hoeffler, 2004). En este marco de análisis se dejan de lado los elementos externos, ya que sin alguien en el exterior dispuesto a poner en valor los recursos obtenidos, este ingreso no se produciría (Basedau, 2005:19)⁶. Por otra parte, en este enfoque se subestima la importancia del proyecto político o la presencia de agravios, como el trabajo forzado de los jóvenes o dictadura (Di John, 2007).

⁶ El lanzamiento en noviembre de 2002 de la iniciativa internacional denominada “Proceso de Kimberley” va en esta línea de evitar que desde los mercados internacionales se alimenten los conflictos en los que haya recursos naturales implicados. En particular, el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley (*Kimberley Process Certification Scheme*), consiste en certificar que los diamantes comercializados con esta etiqueta no proceden de zonas de conflicto. En suma, se trata de evitar la comercialización de los conocidos como “diamantes de sangre” (*blood diamonds*). La iniciativa nació en el año 2000 en Kimberley (Sudáfrica), a partir de discusiones entre gobiernos, representantes de la industria minera implicada y ONGs internacionales (ver <http://www.kimberleyprocess.com>). En general la experiencia hasta la fecha se considera positiva, en la medida en que hoy se estima que los diamantes procedentes de zonas de conflicto representan únicamente una fracción mucho menor de la que existía antes del “Proceso”. Sin embargo, una ONG como Global Witness, particularmente activa en este campo, denuncia obstáculos por parte de algunos gobiernos africanos como Costa de Marfil o Zimbabwe, que dificultan aceptar la pretensión de que los diamantes certificados procedentes de estos países son de zonas sin conflicto y obtenidos respetando los derechos humanos (Global Witness, 2011).

2.4 Otras limitaciones de la teoría de la maldición de los recursos

En suma, los argumentos que usualmente se hallan tras los diferentes enfoques de la maldición de los recursos señalan factores macroeconómicos, de comportamiento e institucionales, para explicar bajo desempeño económico, y autoritarismo o violencia. Como ya se ha señalado, en todos estos enfoques, hay en general una visión pesimista de la presencia de recursos naturales en un país. Disponer de éstos, lejos de ser una “bendición” en términos de desarrollo, significan una “maldición” (Wick y Bulte, 2009). Además, la participación del estado en la gestión de las rentas procedentes de recursos naturales, así como de modo más general en la gestión y planificación del desarrollo son vistas como contraproducentes, particularmente en los enfoques del “estado rentista” y en la teoría del ciclo de la renta.

Este enfoque pesimista se ha incorporado a la literatura ortodoxa a pesar de que los pioneros en esta cuestión tenían un enfoque más optimista. Los autores de la “tesis de las materias primas” (*staples thesis*), como Makintosh (1923), tenían una visión más optimista del papel de las materias primas en el despegue económico de Canadá⁷.

Algunas debilidades del enfoque de la maldición de los recursos ya han sido señaladas por diferentes autores. Siguiendo a Brunschweiler y Bulte (2008), en la literatura empírica de la maldición de los recursos, “abundancia de recursos” se define como la ratio de exportaciones de recursos sobre el PIB, cuando esta ratio se trata más bien de una “proxy” de la “dependencia en los recursos”⁸. Oskarsson y Ottosen (2010) subrayan la importancia de distinguir “dependencia en los recursos” de la “abundancia de los recursos” a la hora de contrastar la conocida hipótesis de Michael Ross (2001) según la cual “el petróleo obstruye la democracia” (“oil hinders democracy”). Estos autores muestran mediante análisis cuantitativo que los mecanismos que subyacen a dicha hipótesis tienen que ver con la dependencia en la explotación de recursos naturales, no en su abundancia física. Por qué un país es dependiente de esta explotación está en relación con su historia particular, la división internacional del trabajo, y la adopción de políticas de desarrollo, tanto a nivel interno como externo, cuestiones que se eluden en la literatura ortodoxa sobre la maldición de los recursos.

2.5 La buena gobernanza como remedio a la maldición

Existe otra literatura, que fundamentalmente tampoco se aparta de la corriente principal, que también cuestiona las conclusiones de la teoría de la maldición de los recursos, partiendo del análisis de casos en los que se cumple el requisito de la “abundancia de recursos”, pero no muestran los efectos sociales y políticas que la teoría señala. En el contexto africano, partiendo del estudio de caso de Botswana, se argumenta que la maldición aparecerá dependiendo de la estructura política e institucional del país, llegando a la conclusión de que un correcto diseño institucional de la gestión de las rentas mineras, o la existencia de “buena gobernanza” en el sentido de la existencia de

⁷ Para una versión más contemporánea y sofisticada de los argumentos de esta tesis, ver Hirschmann (1977).

⁸ En Daniele (2011) hay un test estadístico de esta idea.

transparencia y *accountability*, pueden atenuar los efectos de la maldición (Matti, 2010; McFerson, 2009; Same, 2009; Stevens, 2003). Como en otros enfoques, uno de los problemas de este es que explica lo que acontece donde la maldición funciona, en función de lo que falta, y no en función de los elementos que de hecho están presentes.

Desde este punto de vista, la conclusión no es tan pesimista, ya que lo que se viene a decir es que mediante un buen diseño institucional es posible evitar los efectos negativos de la maldición. Incluso un reconocido académico como Stiglitz (2004) anunciaba que era posible “curar la enfermedad holandesa” con un adecuado diseño institucional. De hecho, esta es la versión de la teoría más extendida entre la comunidad de ONG occidentales y africanas, así como entre los grandes donantes, que ven así una vía de conjugar la agenda de la buena gobernanza con la gestión de las rentas de los recursos naturales, con el objetivo final de la promoción del desarrollo y la reducción de la pobreza. De hecho, la intervención del BM en el proyecto petrolero del Chad iba en esta línea: evitar la maldición de los recursos a través del diseño institucional.

Recientes iniciativas internacionales como la EITI (*Extractive Industries Transparency Initiative*), consistente en garantizar la transparencia en los pagos en la industria petrolera como modo de evitar la corrupción, parten también de este enfoque⁹. El trabajo de la conocida coalición internacional de ONG *Publish What You Pay*, también va en esta línea¹⁰.

2.6 El enfoque estructuralista

Todos estos enfoques expuestos más arriba (y sus críticas) comparten el hecho de que dejan fuera del análisis las cuestiones más estructurales, el papel de los mercados, las ETN, las instituciones financieras internacionales, o el papel de las antiguas metrópolis en el caso de países en desarrollo. En este sentido, existen enfoques heterodoxos más basados en la economía política internacional y la historia que merecen ser tomados en cuenta. Entre los reconocidos como “pioneros” de la economía del desarrollo, como los estructuralistas Prebisch (1950) y Singer (1950), hubo un intento de vincular el típico patrón de comercio de los países en desarrollo basado en la exportación de recursos naturales con su subdesarrollo, pero desde un punto de vista sensiblemente diferente del de la teoría de la maldición de los recursos. La tesis del declive a largo plazo de los términos de intercambio auspiciada por ambos autores, establecía que los precios relativos de las exportaciones de los países en desarrollo en relación con los precios de sus importaciones sufre un deterioro secular. Por lo tanto, el patrón de especialización en la exportación de bienes no-procesados (petróleo incluido), deteriora las perspectivas de desarrollo de estos países. Por qué los precios relativos se deterioran tiene que

⁹ En septiembre de 2002, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible organizada por Naciones Unidas en Johannesburgo (Sudáfrica), Tony Blair anunció el nacimiento de la EITI. La EITI consiste en verificar y publicar los pagos que efectúan las empresas del sector extractivo a gobiernos u otras administraciones públicas, y cotejarlos con los cobros que estas administraciones contabilizan. Tras la Conferencia de París de la EITI, en marzo de 2011, se contabilizan 24 países candidatos y 11 países conformes (Azerbaiyán, República Centroafricana, Ghana, Kirguistán, Liberia, Mongolia, Níger, Nigeria, Noruega, Timor Oriental y el Yemen). Ver <http://www.eiti.org>

¹⁰ Ver <http://www.publishwhatyoupay.org>

ver con las estructuras y los desequilibrios de poder en el comercio internacional. A pesar de ser una tesis muy criticada, los tests empíricos de dicha tesis resisten bien para algunas “commodities” para algunos períodos (Singer y Edström, 1993).

También es relevante la contribución de Hirschmann (1958), que ya advirtió acerca de la falta o la debilidad de los encadenamientos económicos (ya sean encadenamientos de consumo o producción, y ya sean también hacia atrás o hacia delante), entre los enclaves de extracción del recurso y el resto de la economía. Esto es particularmente cierto en la explotación de petróleo, dadas las características técnicas de su explotación, con elevados costes fijos de capital (en general en el caso africano procedente del exterior), poco intensiva en mano de obra (que además es especializada y que por ejemplo en el Chad procede básicamente del exterior), y con poco impacto territorial más allá de los alrededores de las instalaciones.

Estos primeros enfoques tienen en común la idea de fondo según la cual existen factores estructurales y externos detrás de los fracasos de las economías orientadas a la explotación y exportación de recursos naturales, que no aparecen en la literatura ortodoxa sobre la maldición de los recursos que emerge en los 90. Sin embargo, también cabe notar que, como en otros enfoques estructuralistas, la capacidad de los actores locales aparece minimizada. Como hemos visto más arriba, en la corriente principal de pensamiento se toma el estado como el marco de correcto de análisis de los efectos de las rentas del petróleo, mientras que desde un punto de vista estructuralista se va hacia el otro extremo, dejando de lado el papel del estado para explicar los mecanismos de funcionamiento de la industria petrolera. Además, la presencia de otros actores relevantes y heterogéneos como ETNs de países en desarrollo, milicias locales o sindicatos, cuyo rol es altamente relevante para analizar los resultados de la industria petrolera, no aparecen en este enfoque.

En suma, las perspectivas ofrecidas por la literatura de la maldición de los recursos pueden ser puestas en causa si en vez de centrar el foco de atención únicamente en el vínculo entre rentas minerales y desarrollo, abrimos el foco a hacia una perspectiva más amplia, incluyendo la economía política internacional (Carmody, 2011). Desde este punto de vista, los estudios de caso, probablemente iluminen más que las caracterizaciones generales o los estudios cuantitativos de sección cruzada, ya que las historias particulares y el análisis del papel de actores relevantes bien definidos llevan a conclusiones más robustas sobre las implicaciones de la industria petrolera en países en desarrollo.

3. Petróleo y desarrollo en el Chad

En 2003 el Chad pasó a formar parte del club de productores y exportadores de petróleo, gracias a la mayor inversión privada en un único proyecto de la historia del África subsahariana. Tras 8 años de explotación petrolera, sabemos que los efectos sobre el desarrollo han sido muy limitados, y que el autoritarismo preexistente en el país se ha intensificado. En consecuencia, es pertinente debatir acerca de la maldición de los recursos en el Chad.

Muchos de los elementos expuestos en la sección teórica anterior concurren en el caso del Chad. A ellos cabría añadir una particular característica: la formidable intervención del BM en el país para, precisamente, intentar evitar la maldición de los recursos, en la línea de garantizar un diseño institucional de gestión de rentas que prevenga la aparición de los efectos de la maldición.

Efectivamente, en octubre de 2003 el Chad pasó a formar parte del club de exportadores de petróleo. Los aproximadamente 4.200 millones de dólares de la inversión se utilizaron para poner en marcha la explotación de los depósitos de Doba (al sur del país y muy cerca de la frontera camerunesa), y también para construir un oleoducto de 1.076 km. hasta el puerto de Kribi (Camerún), en el océano Atlántico.

MAPA 1: EL OLEODUCTO CHAD-CAMERÚN



Fuente: elaboración propia a partir de publicaciones de Esso

El proyecto, liderado por un consorcio compuesto por Esso, Chevron y Petronas (el Consorcio), había levantado mucha expectación, por supuesto a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Experiencias anteriores negativas de países en desarrollo alertaban de la posibilidad de que el proyecto podía no transformar la renta petrolera en desarrollo, en un ejemplo más de lo que se conoce como “la maldición de los recursos”. La intervención externa del BM intentó contrarrestar dicha maldición mediante la imposición de un mecanismo institucional que obligara al gobierno a aplicar una parte sustancial de la renta petrolera a políticas de crecimiento y reducción de la pobreza, en la línea de lo expuesto en secciones anteriores.

El proyecto iba a llevarse a cabo en un país donde los desafíos del desarrollo eran enormes, con unos indicadores de desarrollo humano muy débiles, incluso para parámetros africanos. En la clasificación del Índice de Desarrollo Humano del PNUD del año 2000 el Chad figuraba en el lugar 167 de 174, con una esperanza de vida de 47,4 años, una tasa de alfabetización del 39,4% de la

población adulta. Apenas un 32% de la población tenía acceso a fuentes de agua mejorada, y la renta per cápita se situaba en unos escasos 856 dólares PPA (UNDP, 2000).

Por otra parte, hay que señalar la inestabilidad política estructural del país. Desde prácticamente la independencia (1960), en mayor o menor intensidad el Chad ha vivido en el conflicto armado permanente¹¹. El actual presidente Idriss Déby, un *big man* procedente del ejército, alcanzó el poder en 1990 a través de un golpe de estado con apoyo francés, que ponía fin al régimen que Hissène Habré había iniciado en 1982 también a través de un golpe de estado¹². Siguiendo la estela de la generalización de los procesos de democratización en todo el continente, el gobierno de Déby redactó y sometió a referéndum una nueva constitución que fue aprobada en marzo de 1996. En junio del mismo año tuvieron lugar las primeras elecciones presidenciales, que ganó Déby en segunda vuelta. En 2001 Déby renovó su mandato a través de elecciones, pero esta vez ya con denuncias generalizadas de fraude electoral¹³. Las elecciones legislativas del año siguiente fueron boicoteadas ampliamente por la oposición, de modo que el partido de Déby (*Mouvement Patriotique de Salut*) obtuvo la mayoría absoluta en el parlamento, asegurando así a Déby y su entorno el control de los principales resortes del estado (Gould y Winters, 2011)¹⁴.

En suma, la inestabilidad político-institucional del país en las primeras fases del proyecto no era el mejor escenario para implementarlo, dada su complejidad, su volumen, y la intensidad y rapidez de los cambios que generaría.

3.1 La génesis del proyecto petrolero en el Chad

Si bien en los años 50 ya hubo prospecciones petroleras infructuosas, el actual consorcio de empresas tiene sus orígenes en 1969, cuando Conoco, una compañía de EEUU, obtuvo unos derechos de exploración cuyo 50% vendería más tarde, en 1971, a Royal Dutch Shell. Las exploraciones fueron fructíferas, y en 1975 se inauguró en Sédigui, al norte del Lago Chad, una modesta explotación que debía cubrir las necesidades del país. Dicha explotación llegó

¹¹ Con la independencia, el poder lo asumió François Tombalbaye, del sur, de la mano del *Parti Progressiste Tchadien* (PTT). El creciente autoritarismo que mostraba el gobierno de Tombalbaye, y los agravios con las poblaciones árabes del norte alimentaron la rebelión del FROLINAT (*Front de Libération Nationale du Tchad*), con apoyo de Libia y Sudán. Con apoyo francés, Félix Malloum (también procedente del sur) tomó el poder en un golpe de estado cruento en 1975, pero no pudo detener la rebelión del FROLINAT. Entre 1979 y 1982 el país quedó sumido en un cruento conflicto armado civil con significativa participación internacional (Libia y Francia), que significó que el Chad pudiera considerarse prácticamente un estado fallido (Azevedo, 1998; Azevedo y Nnandozie, 1997).

¹² El régimen de Habré se caracterizó por masivas violaciones de los derechos humanos, y por haber llevado el país a ser prácticamente un estado fallido (Amnesty International, 2001).

¹³ La oposición documentó el uso por parte del gobierno de tácticas de intimidación para influir en el voto, y de manipulación de las listas electorales. Más significativamente, a los pocos días de la publicación del resultado electoral, los seis candidatos de la oposición fueron arrestados, y sólo la presión del presidente del BM James Wolfensohn hizo que Déby reconsiderara su postura y los liberara (Gould y Winters, 2011).

¹⁴ Como una medida para calmar los ánimos en la región petrolera de Doba, Déby facilitó que el principal partido opositor en la región, *Fédération, Action pour la République* (FAR), hiciera efectiva la representación que obtuvo en las elecciones (10 escaños). Además, Déby designó un primer ministro procedente del sur. Todo ello contribuyó a aumentar el apoyo al proyecto petrolero (Gould y Winters, 2011).

a dar 1.500 barriles por día en 1980, y fue en esa altura que Exxon y Chevron entraron en el Consorcio, pero el conflicto armado que afectaba el país desde 1979, paralizó la extracción. Sin embargo, en 1988 y con el conflicto todavía vivo, este consorcio de empresas (Exxon, Chevron y Royal Dutch Shell) firmó una *Convention Agreement* con el gobierno chadiano que garantizaba derechos de exploración hasta 2004, y una concesión de 30 años para desarrollar los campos de extracción alrededor de Doba, así como el transporte del petróleo.

La estabilización política del país a partir de 1990 posibilitó el replanteamiento del proyecto petrolero del Consorcio. En 1992 Chevron dejó el Consorcio vendiendo su participación a Elf, y al año siguiente fue anunciado un gran descubrimiento en Doba: un conjunto de bolsas que se estimaba que albergaban 900 millones de barriles de crudo.

En la medida en que este petróleo iba a ser evacuado hacia el mercado internacional, había que construir un oleoducto hasta Kribi, en la costa camerunesa, por lo que los costes fijos de inicio del proyecto eran muy elevados. Ante estos costes, el Consorcio y los bancos occidentales que estaban considerando financiar los gastos iniciales del proyecto, buscaron alguna forma de protección jurídica contra eventuales expropiaciones, y también garantías de no interferencia en los asuntos técnicos relativos a la explotación. Así, las compañías del Consorcio propusieron al BM actuar de garante e intermediario entre ellas y los gobiernos del Chad y Camerún (Gould y Winters, 2011). Explícitamente, desde fuentes oficiales de Exxon se dijo que sin la participación del BM la empresa no participaría en el proyecto “para evitar riesgos y complicaciones” (citado en Runyan, 2000: 10).

En este contexto, el BM vio en el proyecto del Chad, una oportunidad para conjugar su nuevo discurso centrado en la reducción de la pobreza y la profundización de la agenda de la buena gobernanza que estaba llevando a cabo desde la segunda mitad de los 90. Además, la situación geográfica del país, que obligaría a evacuar su petróleo por el Golfo de Guinea, encajaba en la estrategia geoenergética de EEUU, consistente desde la Primera Guerra del Golfo (1991) en disminuir la dependencia energética de la convulsa región de Oriente Medio, e incrementar las importaciones desde el Golfo de Guinea (Soares de Oliveira, 2007; Obi, 2009).

La intervención del BM se centraría sobre todo en el diseño institucional de los mecanismos de gestión de la futura renta petrolera, que se deberían orientar a la reducción de la pobreza. Tras unos años de consultas y negociaciones, en 1996 los gobiernos del Chad y Camerún solicitaron formalmente apoyo financiero al BM y empezó el trabajo de formulación del proyecto. A medida que se iban conociendo los detalles de éste, la inquietud entre la sociedad civil chadiana y grupos ecologistas internacionales se iba abriendo paso. En julio de 1998, 86 ONGs de 28 países mandaron una carta abierta al entonces presidente del BM James Wolfensohn proponiéndole que al Banco se retirara del proyecto (Horta y Nguiffo, 1998).

Al año siguiente, Elf y Shell salían del Consorcio por entender que los riesgos sociopolíticos del mismo eran demasiado elevados, y por las controvertidas experiencias de ambas empresas en el Congo y Nigeria respectivamente. Exxon anduvo unos meses buscando nuevos socios, y tras algunas incertidumbres, finalmente el Consorcio quedó estructurado con Exxon detentando el 40% de las acciones, Petronas el 35%, y Chevron el 25%.

Paralelamente, se constituyeron TOTCO (Tchad Oil Transportation Company) y COTCO (Cameroon Oil Transportation Company) para gestionar el futuro oleoducto¹⁵.

Finalmente, en junio de 2000 el BM dio luz verde a la financiación del proyecto (ver Tabla 1) y empezó la construcción del oleoducto y el resto de infraestructuras, y con meses de adelanto sobre lo previsto, en octubre de 2003 empezó la explotación.

TABLA 1: LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO PETROLERO CHAD-CAMERÚN (MILLONES DE DÓLARES)

Grupo del Banco Mundial:	
• Préstamos del BIRF al Chad y Camerún	92,9
• Préstamo de la CFI	200
Banco Europeo de Inversiones	41,5
Agencias de crédito a la exportación	
• US EXIM Bank	200
• COFACE (Francia)	200
• African ExIm Bank	200
El resto hasta los 4.200 millones lo completan las aportaciones directas del consorcio (ExxonMobile, Chevron, Petronas), y una pequeña cantidad aportada por bancos comerciales (ABN-Amro y Crédit Agricole Indosuez)	

Fuente: elaboración propia a partir de Gary y Reisch (2004)

3.2 El diseño institucional de la gestión de la renta petrolera en el Chad

Como se puede apreciar en la Tabla 1, la aportación del BM cuantitativamente no fue muy significativa, pero más allá de este limitado apoyo financiero, el BM actuó de “garante moral”. En 1999 el BM forzó la aprobación en el parlamento chadiano de la Loi 001/PR/99, en la que se estableció que una parte sustancial de los ingresos públicos derivados del proyecto petrolero debían aplicarse a sectores considerados prioritarios para la reducción de la pobreza, y debían ser gestionados por un comité de supervisión con participación de la sociedad civil. Lejos de ser un modelo de gestión genuino, nacido de la voluntad política del gobierno chadiano o fruto de la correlación de fuerzas del país, claramente se trata de una intervención externa, y ya en su momento se cuestionó si ello no suponía una interferencia en la soberanía del Chad. Incluso el ex embajador de EEUU en el Chad Donald Norland calificó la elaboración y aprobación de la ley como una “violación de la independencia de una nuevo estado africano independiente” (Gould y Winters, 2011: 10).

La *Loi* contemplaba que los ingresos directos del gobierno (*royalties* y dividendos) que generaba la venta del crudo de Doba en los mercados internacionales, los pagara el Consorcio en una cuenta custodiada (*escrow*

¹⁵ En TOTCO, el gobierno del Chad detenta el 15% de las acciones, mientras que el Consorcio posee el 85% restante. Y en paralelo, en COTCO el gobierno de Camerún tiene el 15% de las acciones, el del Chad el 5%, y el 80% restante corresponde al Consorcio.

*account) en el Citybank en Londres, que de hecho manejaba el BM y sobre la que tenía poder discrecional para congelarla conjuntamente con el FMI. Tras el pago de las comisiones de gestión bancaria pactadas y del servicio de la deuda del BIRF y el Banco Europeo de Inversiones, el 10% restante se transfería a otra cuenta en el mismo banco en Londres denominada *Fonds pour les Générations Futures* (FGF). El objetivo del FGF era paliar los efectos macroeconómicos de la “enfermedad holandesa”, según se ha expuesto en la sección anterior. En este caso concreto se trataba de garantizar que el país dispusiera de un fondo sustancial de recursos para acometer la era post-petrolera del país.*

El 90% restante, con la aquiescencia del BM, se transfería a una cuenta de la *Banque des États de l'Afrique Centrale* en Níjera¹⁶. De ese resto, un 80% iba a una denominada “cuenta de estabilización”, que eran los fondos exclusivamente asignables a los denominados “sectores prioritarios”. Estos “sectores prioritarios” se definían como aquellos con más incidencia en la reducción de la pobreza, y que sin grandes precisiones se determinaron que fueran educación; salud y servicios sociales; desarrollo rural; infraestructuras; y medio ambiente y gestión del agua. Otro 15% se asignaba directamente al Tesoro público para uso discrecional del gobierno, y finalmente el 5% restante iba a parar a la región productora de Doba¹⁷.

Por otra parte, desde 2001, y en el marco general del giro programático del BM y el FMI hacia instrumentos explícitamente orientados a la reducción de la pobreza, el Chad había entrado en la Iniciativa HIPC, y se estaba beneficiando de reducciones de la deuda pública multilateral. Uno de los requisitos para acceder a los beneficios de la Iniciativa HIPC consiste en la preparación por parte del gobierno, y de manera participativa, de una estrategia integral de reducción de la pobreza. En el caso del Chad, ésta se denominó *Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté* (SNRP), y fue aprobada por un comité conjunto del BM y el FMI en junio de 2003. En suma, en el modelo diseñado por el BM para el Chad, el petróleo (y la condonación de la deuda, aunque en mucha menor medida), venían a alimentar una estrategia integral de reducción de la pobreza¹⁸.

Otra de las particularidades del modelo que establecía la *Loi* era la creación de un cuerpo de control del gasto, denominado *Collège de Contrôle et*

¹⁶ La BEAC (*Banque des États de l'Afrique Centrale*) forma parte de la estructura de la CEMAC (*Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale*), que agrupa a Camerún, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Gabón y la República del Congo, amén del Chad. La CEMAC es un área de integración monetaria, en la que la BEAC es la autoridad monetaria y gestiona el Franco CFA Centroafricano, respaldado por el Banco de Francia.

¹⁷ Este 5% tenía entre otros objetivos frenar el descontento en la población de la región, recelosa históricamente de todo lo que viene del norte. El clivaje norte-sur explica buena parte de la inestabilidad política estructural del Chad. Durante los años 90 en el sur del país operó un grupo rebelde con un programa político federalista (*Forces Armées de la République Féderale*), que fue desmantelado militarmente entre 1997 y 1999. También cabe señalar que en los años anteriores al inicio de la explotación petrolera, la represión político-militar se acrecentó en la región (Crisis Group, 2009; Petry y Bambé, 2005: 89-93; Survie et al., 2003).

¹⁸ Para una panorámica general del giro programático del BM y el FMI a finales de los 90 y principios de este siglo, ver Colom (2005 y 2008b).

¹⁹ Con posterioridad, en 2008, una SNRP II fue aprobada, y de hecho continúa vigente. Por otra parte, el Chad continúa formando parte de la Iniciativa HIPC, aunque con dificultades para cumplir con las condicionalidades macroeconómicas exigidas por el FMI (ver <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm>).

Surveillance des Ressources Pétrolières, que debía encargarse de gestionar ese 80% de ingresos asignables a los “sectores prioritarios”²⁰. Los miembros del Collège (sobre el papel nueve, pero que han acabado siendo *de facto* ocho) procedían del aparato del estado, pero también por la sociedad civil, que a través de diversas organizaciones participaban en su gestión²¹. Este dispositivo responde a la idea expresada en la sección anterior, según la cual un buen diseño institucional, puede forzar la adopción de reglas y comportamientos basados en el discurso de la “buena gobernanza”, y por lo tanto evitar algunos de los efectos negativos de la maldición de los recursos, particularmente los asociados a la corrupción.

El voluntarismo del BM llevó a soslayar *a priori* algunos aspectos de este diseño que posteriormente fueron cruciales para explicar su fracaso. En primer lugar, la naturaleza externa de la intervención. Desde los años 80, cuando se empiezan a generalizar los programas de ajuste estructural del BM y el FMI en el continente, uno de los problemas a que se deben enfrentar estas instituciones es la resistencia de los estados africanos (ya sea desde el ámbito político como del administrativo) a adoptar nuevas reglas y mecanismos de funcionamiento. Un hecho que estilizadamente puede identificarse con el clásico problema del principal y el agente (Killick, 1996). Ello acaba provocando que los encargados (los gobiernos) de poner en marcha las nuevas normas de comportamiento (procedentes del exterior) busquen vacíos legales en las normas para llevar adelante su propia agenda, desvirtuando así el espíritu de dichas normas. En el caso del Chad, incluso antes de que los ingresos del petróleo llegaran a las arcas públicas del país, el presidente Déby movió hilos para controlar el Collège. Previo a esto, ya de entrada los dos representantes del parlamento pertenecían al partido político de Déby (*Mouvement Patriotique de Salut*). En febrero de 2004, apenas unos meses después de que los primeros ingresos petroleros se hicieran efectivos, Déby designó a su cuñado Idriss Ahmet Idriss director de la BEAC para el Chad, lo que automáticamente le convertía en miembro del Collège. Finalmente, también en 2004 y contraviniendo las normas constitucionales, Déby sustituyó el presidente del Tribunal Supremo (*Cour Suprême*). Así las cosas, Déby ejercía un control directo sobre un número sustancial de miembros del Collège, lo que le permitía intervenir en las decisiones del College (Winters y Gould, 2011: 235; Massey y May, 2005: 259).

Otro de los aspectos cruciales soslayados por el BM era la ausencia crítica de capacidades *ex ante* para gestionar el flujo de recursos por parte del Collège y de la administración pública chadiana en general. Los dos créditos de 17,5 y 23,7 millones de \$ del BM aprobados al Chad durante el año 2000 para incrementar las capacidades técnicas acabaron siendo insuficientes. Como muy gráficamente describía en 2002 Dinanko Ngomibe, a la sazón director de presupuesto del Ministerio de Finanzas, “menos del 25% de mis colegas en la función pública sabe cómo manejar un ordenador, incluso cuando hay

²⁰ “Faire en sorte que l’exploitation du pétrole du Tchad soit une manne et non une malédiction”, así reza un cartel en la entrada del Collège de Contrôle et Surveillance des Revenus du Pétrole en Ndjamena.

²¹ Dos diputados, el director general del Tesoro, un magistrado del Tribunal Supremo, y el director para el Chad de la BEAC. A estos cinco miembros, hay que añadir cuatro de la sociedad civil: un representante de las ONG, uno de los sindicatos, uno de las organizaciones de derechos humanos, y uno de las tres confesiones religiosas mayoritarias existentes en el país (católicos, protestantes y musulmanes, que se alternan en el cargo).

electricidad” (citado en Kojucharov, 2007: 486). Centrándonos de nuevo en el *Collège*, los medios de los que disponía para afrontar su trabajo contrastaban con los recursos que debía gestionar. Apenas un par de vehículos y un pequeño grupo de técnicos sin experiencia con un presupuesto de funcionamiento muy limitado. Además, la *Loi* no otorgaba ningún instrumento legal al *Collège* para obligar al gobierno a cumplir sus recomendaciones (Winters y Gould, 2011: 235). Así las cosas, no sorprende que Thérèse Mékombé, vicepresidenta del *Collège* y miembro representante de las ONG, denunciara en una conferencia sobre la transparencia en la industria petrolera en Londres en mayo de 2004, que el *Collège* estaba “*underfunded, understaffed and deprived of information by both Exxon and the Chadian government*”, y que en esas circunstancias no podía hacer su trabajo (BBC News, 2004). Aunque posteriormente esta situación de marginalidad del *Collège* se solventó en alguna medida, sobre todo en lo relativo a la transparencia, el *Collège* ha quedado como una institución sin capacidad real de influencia en el marco del proyecto petrolero.

El tercer aspecto soslayado en este diseño institucional eran los riesgos asociados a la inestabilidad política estructural del país. A pesar de ser un país con elecciones regulares e instituciones políticas formalmente democráticas, a nadie se le escapaba que la existencia de diversos grupos armados rebeldes y el autoritarismo del presidente Déby podían jugar en contra de la transformación de los ingresos petroleros en desarrollo, y que de hecho los ingresos del crudo podían reforzar el autoritarismo preexistente e incluso llevar el país a un conflicto armado de mayor escala. Tan pronto como en el año 2000, tras la firma del contrato con el Consorcio y el BM, el gobierno recibió un *bonus* de 25 millones de \$ de las nuevas empresas del Consorcio (Chevron y Petronas)²². Tras diversos rumores, el presidente Déby tuvo que admitir que había dedicado al menos 4,5 millones de \$ a la compra de armas²³.

A pesar de las debilidades que exante se podían detectar en el diseño institucional de la gestión del petróleo, el proyecto se llevó adelante y en octubre de 2003 el petróleo empezó a manar de los pozos de Doba, alcanzando al cabo de pocos días la costa camerunesa, y reportando los primeros ingresos al Tesoro del Chad en noviembre de 2003. Muy significativamente, el día de la inauguración oficial del oleoducto y de las instalaciones de extracción, el 10 de octubre de 2003, el *Collectif des Associations Tchadiennes de Défense des Droits de l'Homme* (CADH), hizo un llamamiento a la “observación de un duelo nacional” (Crisis Group, 2009: 2).

3.3 El fracaso del modelo chadiano de gestión de la renta petrolera

Tan pronto como en enero de 2004, los problemas empezaron a surgir en el dispositivo institucional establecido. Tras escasamente tres meses de exportación del petróleo, el programa que el Chad tenía en vigor con el FMI (PRGF) expiró, y ante los sistemáticos incumplimientos macroeconómicos por parte del gobierno, el FMI congeló la cuenta custodiada de los ingresos

²² Es una práctica habitual en el sector petrolero que la empresa concesionaria haga un pago único en el momento de la firma del contrato al gobierno, denominado *bonus*.

²³ La confesión del presidente Déby coincidió en el tiempo con una petición internacional de su propio gobierno de ayuda alimentaria (Massey y May, 2005: 259)

petroleros, lo que provocó tensiones fiscales durante el primer semestre de 2004 que culminaron con un intento de golpe de estado en mayo por el impago de salarios al ejército. Por otra parte, en octubre del mismo año, un comunicado de prensa del gobierno señalaba la frustración del gobierno con los términos del contrato con el Consorcio, instando a su renegociación, en un intento de tener acceso a más fondos de uso discrecional para hacer frente a la inestabilidad política (Pegg 2009: 312).

En 2005 las tensiones políticas internas se incrementaron con la decisión de Déby de promover una reforma constitucional que le permitiera presentarse como candidato a la presidencia por tercera vez. Ello fomentó la desafección de su entorno de posibles sucesores, que acabaron abandonando el presidente y organizando un movimiento rebelde que se instaló en el este del país con el apoyo del gobierno de Sudán, enemigo político de Déby²⁴. Por otra parte, Déby anunció en octubre del mismo año su intención de reformar la *Loi* con el argumento de la necesidad de poder acceder a más fondos para dedicarlos a seguridad ante la rebelión. A pesar de la oposición del BM, en diciembre se aprobó parlamentariamente la reforma, que significó un mayor acceso a fondos de uso discrecional, y que incluía la seguridad como sector prioritario, lo que abría la puerta a mayor gasto militar. Por último, la reforma también incluyó la desaparición del *Fonds pour les Générations Futures*, cuyo monto acumulado, 36,2 millones de \$, fue apropiado por el gobierno. Ante tal incumplimiento de las reglas del juego, el BM suspendió todos los desembolsos relativos al proyecto petrolero y congeló la cuenta custodiada de los ingresos petroleros.

La situación se agravó cuando en abril de 2006 un ataque de la coalición rebelde, que casi depone a Déby, solamente pudo ser atajado por una intervención militar francesa. La perspectiva de que el Chad pasara a ser un estado fallido, y las presiones de Francia y EEUU, llevaron al BM a aceptar la mayor parte de las condiciones que proponía el gobierno chadiano, que se concretaron en julio de 2006 en un *Memorandum of Understanding*, que supuso que continuasen los desembolsos del BM, y que el gobierno del Chad comprometiera el 70% del presupuesto de 2007 a los sectores prioritarios²⁵.

También en julio de 2006, Déby impulsó la creación de una compañía pública, la *Société des Hydrocarbures du Tchad* (SHT), que conjuntamente con el reconocimiento diplomático de China en detrimento de Taiwán, le sirvió para amenazar implícitamente a las compañías minoritarias del Consorcio (Chevron y Petronas) con su expulsión del Consorcio y del país para ser sustituidas por la nueva SHT o por alguna compañía china. De modo explícito, en agosto exigió a Chevron y Petronas el pago de 450 millones de \$ en concepto de impuestos atrasados²⁶. Durante el resto de 2006 y 2007, Déby reforzó su

²⁴ A finales de 2005 una coalición rebelde nacida en el entorno de Déby se instala en el este del país dispuesta a derrocarlo militarmente. Todos los líderes de la rebelión son antiguos colaboradores de Déby. La rebelión también tenía una dimensión internacional ya que tiene conexiones con el conflicto del Darfur sudanés.

²⁵ Las presiones de EEUU tuvieron que ver con el contexto global de rápida elevación del precio del petróleo, y las incertidumbres que la invasión de Irak generaba en Medio Oriente, el principal suministrador de petróleo de EEUU, que hacían del petróleo del Golfo de Guinea un sustitutivo satisfactorio.

²⁶ Finalmente en octubre de 2006 dichas compañías pagaron 289 millones de \$ (Pegg, 2009: 315).

posición negociadora *vis-à-vis* el Consorcio, y por otra parte, acentuó su autoritarismo²⁷.

El 4 de febrero de 2008 otro gran ataque rebelde a Ndjamena volvió a poner en jaque al gobierno de Déby, pero de nuevo la intervención logística y militar francesa evitó el cambio de gobierno²⁸. En esta ocasión el gobierno salió reforzado por los apoyos internacionales que obtuvo, especialmente de Francia (Bayart, 2008; Hansen, 2011a). Ante todo ello, el BM ya no podía mantener más su posición ante la evidencia de que el modelo que había diseñado se había venido abajo, y en agosto de ese año expresó sus preocupaciones acerca del cumplimiento del *Memorandum of Understanding*. Finalmente, el 5 de septiembre el Chad devolvió la deuda que tenía con el BM relativa al proyecto (65,7 millones de \$), acabando así con la implicación del BM en él.

4. Lecturas del caso del Chad: maldecidos...y bendecidos

4.1 El impacto fiscal de la renta petrolera y la causalidad en el conflicto

Según lo proyectado, la producción de los campos de Doba no será muy grande en comparación con la de otros productores africanos. De todos modos, en la medida en que se están poniendo paulatinamente en marcha nuevos pozos en la zona de explotación actual y en otras zonas del país, y también se están llevando a cabo nuevas prospecciones que están arrojando resultados positivos, la posición relativa y absoluta del Chad como productor africano puede variar en el medio plazo²⁹. En todo caso, en un país con una población pequeña (algo más de 10.700.000 habitantes), y una estructura estatal débil y también pequeña, el impacto del petróleo sobre la economía y las finanzas

²⁷ Las autoridades empezaron a dificultar la movilidad de las ONG locales en la zona productora, Déby remodeló según sus intereses el comité de gestión de los fondos asignados a la región productora, y abolió la *Coordination Nationale du Projet Pétrole*.

²⁸ Desde el ataque de 2006 la alianza rebelde establecida en el este del país había experimentado algunos cambios. En febrero de 2008 eran tres los grupos que estuvieron a punto de tomar el palacio presidencial: la *Union des Forces pour la Démocratie et le Développement* (UFDD), liderada por Mahamat Nouri, antiguo ministro de Déby; el *Rassemblement des Forces pour le Changement*, liderado por Timan Erdimi, sobrino de Déby y antiguo colaborador suyo con importantes cargos públicos; y la UFDD-Fondamentale, una escisión de la UFDD liderada por Abdelwahid Aboud Mackaye, también un antiguo colaborador de Déby. A finales de 2008 una nueva alianza fue establecida, la *Union des Forces pour la Résistance* (UFR), con apoyo logístico del gobierno sudanés. Sin embargo, el acuerdo de paz entre Sudán y el Chad de enero de 2010 ha debilitado enormemente la UFR, de modo que puede afirmarse que actualmente la UFR no tiene posibilidad alguna de derrocar militarmente al gobierno de Déby (Hansen, 2011b; HSBA, 2011).

²⁹ Además de los campos de Doba y otros adyacentes explotados por el Consorcio, la *Chinese National Petroleum Company* (CNPC) detenta el 100% de una concesión (Permit H) que le ha permitido poner en marcha una serie de pozos en la cuenca de Bongor, concretamente en Bousso. El petróleo extraído es transportado 300 km. al norte a través de un oleoducto también construido por la CNPC hasta la refinería de Djermaya (*Société de Raffinage de N'Djaména*), unos 30 km. al norte de Ndjamena (Mobbs, 2011). La propiedad de dicha refinería, en funcionamiento desde junio de 2011, es detentada en un 60% por la CNPC, y en un 40% por la SHT (ver <http://www.cnpc.com.cn/en/cnpcworldwide/chad>). La refinería fue construida con el objetivo de proveer el mercado interno chadiano. Sin embargo, la política de Déby de fijar un precio máximo de venta del crudo refinado por debajo del precio de coste está bloqueando la producción (Xinhua News, 2011).

públicas es más que notable. Además, con un precio del petróleo elevado y sin expectativas de bajar, dicho impacto se multiplica. De modo que, más allá del fracaso y deconstrucción del modelo regulador del BM, el impacto de la renta petrolera sobre la economía política del país, y sobre sus finanzas públicas en particular necesariamente va a ser relevante en el futuro inmediato y más allá. Otra de las consecuencias de todo el proceso analizado es el aumento del autoritarismo en el Chad. Uno de los indicadores de esta deriva política es el gasto militar, cuyo crecimiento desde 2005 no puede disociarse del incremento de las disponibilidades financieras del gobierno como consecuencia de la renta petrolera, y también del escaso control del gasto público. Como puede apreciarse en la Tabla 2, el aumento coincide en el tiempo con la acentuación de la inestabilidad política.

TABLA 2: GASTO MILITAR DEL CHAD (DÓLARES CONSTANTES DE 2009)

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
33,8	49,8	56,3	60	60,6	61,4	72,7	73,9	(...)	479	638	436	242

Fuente: SIPRI Database
 (...) sin datos disponibles

De aquí podría derivarse la causalidad atribuida a la renta petrolera por parte de los autores de la maldición de los recursos. Es decir, que la renta petrolera crea el conflicto entre los “propietarios” de la renta y los que creen que tienen posibilidades de acceder a ella mediante el enfrentamiento armado, calculando racionalmente costes y beneficios según el modelo del “rent seeking”. Sin embargo, una causalidad diferente puede ser establecida, en la medida en que el conflicto ya existía previamente en el Chad, y el enfrentamiento armado entre facciones forma parte de la cultura política del país desde prácticamente la independencia, como hemos visto más arriba. El conflicto no lo crea la renta petrolera, sinó que el petróleo viene a alimentar un conflicto preexistente, lo que constituye una causalidad diferente (Massey y May, 2009).

4.2 Los límites de “la matriz de la buena gobernanza”

La adopción por parte de los países en desarrollo de los principios y la praxis de la “buena gobernanza” presenta numerosas dificultades. El Chad ilustra las dificultades de establecer desde el exterior un modelo de prácticas político-administrativas en un espacio de tiempo tan corto, y que no responde a una evolución propia o a una demanda real. Tras el fracaso del modelo de “estado mínimo” propio de los primeros planes de ajuste estructural, el modelo de “buena gobernanza” impulsado a partir de mediados de los 90 por el BM y el FMI también tiene sus límites (Abrahamsen, 2001; Harrison, 2004).

Desde una perspectiva sistémica, Carmody (2009: 354) argumenta que la “matriz de la buena gobernanza” es uno de los instrumentos que los países del norte impulsan en países en desarrollo para establecer y coordinar un modo de regulación local del capitalismo de libre mercado compatible con las estrategias globales de las grandes empresas y los intereses de las grandes potencias.

Desde este punto de vista, la “matriz de la buena gobernanza” lleva a los gobiernos africanos a abrir sus economías a las exportaciones y favorecer la

IED, particularmente en el sector de los recursos naturales. En paralelo, y sin entrar en contradicción con lo anterior, la misma matriz impulsa políticas de reducción de la pobreza para favorecer la gobernabilidad de estos países y la legitimación del programa neoliberal de desregulación, que se concretan en los PRSP.

En el caso del Chad, todo ello se traduce en un constructo jurídico impulsado por el BM, que permite las operaciones de explotación del Consorcio, que no por casualidad encajan en los intereses estratégicos de EEUU. A cambio, el gobierno recibe una renta que debe usarse principalmente en las políticas de reducción de la pobreza expresadas en la SNRP. Según expresa Pegg (2005: 20), la causación lógica propuesta es “extracción de recursos + buena gobernanza = reducción de la pobreza”, por el contrario “extracción de recursos + mala gobernanza = exacerbación de la pobreza”.

4.3 Los límites de la transparencia

Relacionado con el punto anterior, uno de los aspectos concretos de la “buena gobernanza” en el Chad han sido las políticas de transparencia en la gestión de la renta. Y hay que decir que en general la ha habido. La información acerca de los flujos de renta, de la asignación de recursos derivada de la renta, de la actividad extractiva y de los impactos socioeconómicos, ha sido abundante y de acceso relativamente fácil:

- a. Trimestralmente EssoChad viene elaborando un detallado informe financiero³⁰.
- b. A requerimiento de ONGs locales e internacionales, en 2001 la presidencia del BM estableció un comité independiente ad-hoc de seguimiento del proyecto (*International Advisory Group*³¹), con la misión de auditar sobre el terreno el cumplimiento de los términos socioambientales de los contratos, la gestión de la renta petrolera, y asesorar eventualmente al BM y a los gobiernos del Chad y Camerún sobre dichos aspectos. Hasta 2009, este comité regularmente ha venido publicando informes, en los que se ha dado cuenta de los problemas existentes del modelo de gestión de la renta.
- c. Paralelamente, la CFI también encargó a una consultora externa (D'Appolonia S.p.A.) los trabajos de monitorización socioambiental en el marco de lo que se denominó *External Compliance Monitoring Group* (ECMG). El ECMG ha realizado numerosas visitas al proyecto, y no ha dejado de emitir públicamente informes en los que se ponían de manifiesto numerosos problemas que debían ser corregidos para cumplir con los estándares ambientales de la IFC, y que en su mayor parte no fueron

³⁰ Ver <http://www.essochad.com>.

³¹ Cuyo nombre completo es *International Advisory Group for the Chad-Cameroon Petroleum Development and Pipeline Project*, también conocido por su nombre en francés *Groupe International Consultatif du Projet d'Exploitation Pétrolière et d'Oléoduc Tchad-Cameroun*, ver <http://www.gic-iag.org>. En septiembre de 2009 el GIC-AIG agotó su mandato, y no se prevé que otra estructura la reemplace en la medida en que el BM ya no está formalmente vinculado al proyecto.

solvantados³². A pesar de todo, el ECMG en agosto de 2004 emitió un *certificate of compliance*, que fue objeto de críticas por parte de ONG locales e internacionales (Horta et al. 2007).

- d. Aunque a la postre ha sido un órgano manipulado por el poder político como se ha señalado más arriba, el *Collège*, ha emitido informes financieros mensuales sobre el uso de la renta petrolera bajo su control, y en su momento también puso de manifiesto algunas irregularidades administrativas relativas a licitaciones públicas³³.

En suma, si bien la transparencia informativa es deseable en sí misma, ésta no evita automáticamente los problemas puestos de relieve por la literatura (Kolstad y Wiig, 2009). La existencia de una razonable transparencia en el proyecto petrolero del Chad no ha impedido la corrupción, la acentuación del autoritarismo y las dificultades para transformar en desarrollo la renta petrolera (Colom, 2011)³⁴.

4.4 El diseño de la secuencia temporal y de la estructura de los ingresos

El tiempo ha puesto en evidencia que la programación de la secuencia temporal del proyecto no fue apropiada. La velocidad de desarrollo de las capacidades institucionales a todos los niveles (tesorería, órganos de gestión y control de la renta, administración territorial, ministerios de los sectores prioritarios, etc.) ha sido sobrepasada por la llegada de la renta unos meses antes de lo previsto, y por los elevados precios del petróleo a partir de 2006, que han provocado importantes cuellos de botella y problemas administrativos. A junio de 2011 (tras casi 8 años de proyecto) los ingresos para el gobierno del Chad derivados del proyecto ascendían a 7.429 millones de dólares, cuando la previsión en 2000 fue de 1.700 en 25 años (EssoChad, 2011: 69; IAG, 2009: 20).

Aquí hay que señalar la poca consideración que el BM hizo de la necesidad de tener apuntalada la capacidad de gestión de la renta petrolera antes de que ésta llegara. Los proyectos de construcción de capacidades que paralelamente puso en marcha el BM se diseñaron sobre la base de “*to have at least some capacity in place when the project is implemented*” (Pegg, 2009: 319). En este sentido quizás cabría considerar la aplicación de una especie de regla de Hotelling institucional, según la cual un recurso debería dejarse en el suelo hasta asegurar que haya un dispositivo institucional capaz de garantizar que el valor actual neto de su explotación en términos de desarrollo sea positivo.

Otra de las lecturas se refiere a la estructura de los ingresos prevista por la *Loi*. Ésta distingue entre ingresos directos (regalías y dividendos derivados de la participación en el capital de TOTCO, empresa propietaria del oleoducto), e

³² Ver <http://www.ifc.org/ecmg>

³³ Ver <http://www.ccsrp.td>

³⁴ Según pudo observar de primera mano el autor durante el trabajo de campo realizado en 2004 y 2005, el conocimiento de los mecanismos de funcionamiento de la industria petrolera, y también de los mecanismos presupuestarios eran más bien limitados entre las organizaciones de la sociedad civil chadiana. De modo que el acceso a la información no garantizaba su correcta interpretación, por lo que limitaba las posibilidades de su uso en las actividades de presión política de dichas organizaciones.

ingresos indirectos (impuestos sobre el Consorcio, permisos y otras tasas). La *Loi* (tanto la original como la reformada en 2006) solamente prevé intervenir sobre los ingresos directos, dejando el uso de los indirectos a discreción del gobierno. En un principio se estimó que los indirectos no superarían el 40% del total, pero una de las consecuencias del mayor poder negociador han sido mayores impuestos sobre el Consorcio, de modo que a junio de 2009, de los 7.429 millones de dólares ingresados, un 68% (5.051) corresponden a ingresos indirectos, que por lo tanto no están cubiertos por la *Loi*, frente a un 32% (2.378) de ingresos directos (EssoChad, 2011: 69).

4.5 La obsolescencia de la negociación

Aunque el caso del Chad pueda parecer un caso de manual de la teoría de la obsolescencia de la negociación (*obsolescing bargaining*), hay algunos elementos que cabe tener en cuenta y que pueden poner en cuarentena este enfoque. Esta teoría establece que en una negociación entre un gobierno de un país en desarrollo y una compañía transnacional que acuerdan un contrato de explotación de recursos naturales, el poder negociador en principio lo tiene la compañía, pero una vez la inversión y la infraestructura están hechas, dicho poder se desplaza hacia el gobierno. *Exante*, el país en desarrollo dispone de recursos naturales que no pueden ser explotados si no es mediante la aportación externa de capital y tecnología de compañías transnacionales. En esta situación, el poder negociador del gobierno es escaso, de modo que está dispuesto a aceptar condiciones contractuales a menudo leoninas. Sin embargo, hecha la inversión, y comprobada la rentabilidad de ésta, el nivel de riesgo percibido por la compañía cae, y el gobierno dispone de mayor margen de maniobra para renegociar a su favor el contrato (Vernon, 1971).

En el caso del Chad, como hemos visto, apenas al cabo de apenas un año de haber iniciado la exportación de petróleo, el gobierno empezó a presionar al Consorcio para revisar las condiciones del contrato, y a finales de 2005 anunció al BM su intención de cambiar el modelo de uso de la renta pactado previamente, cosa que finalmente sucedió. Aparentemente, lo acontecido encaja con la teoría de la obsolescencia de la negociación, pero un análisis más detallado nos lleva a ver otras cosas.

En primer lugar, las relaciones entre el gobierno del Chad y el Consorcio, son más cooperativas que conflictivas a pesar de la retórica a menudo utilizada por Déby, los intereses compartidos son muchos. Sin ir más lejos, en febrero de 2011 Esso y el gobierno del Chad alcanzaron un acuerdo para vender directamente el crudo chadiano a través de una joint venture (EIU, 2011). Ello se ve reforzado por un marco en el que las nacionalizaciones no figuran en la agenda de las políticas de desarrollo.

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, desde los años 90 se observa en el ámbito de la IED, que la negociación entre gobiernos nacionales y ETN se desplaza a la arena multilateral y bilateral. Es decir, que las grandes líneas de las reglas de gobernanza de la IED se predeterminan desde otros ámbitos, como la OMC, el FMI o el BM (Haslam, 2004). En el caso del Chad, como en tantos otros países africanos, las condiciones bajo las que operan las empresas del sector extractivo vienen determinadas por la agenda liberalizadora de la “matriz de la buena gobernanza”, por lo que el margen de

maniobra real del gobierno es limitado en cuanto a condicionar las operaciones del Consorcio.

En tercer lugar, observemos que en el caso del Chad, la obsolescencia se ha dado en relación al BM y apenas en relación al Consorcio. Es decir, el gobierno no ha respetado el trato previamente acordado con el BM, lo que ha llevado al BM a abandonar el proyecto petrolero, aunque no otros proyectos en otras áreas. Y por su parte el Consorcio ha sufrido presiones para pagar más impuestos, cosa que ha acabado sucediendo, pero las operaciones de extracción en ningún momento se han visto en peligro. Es decir, en este caso el riesgo de la “obsolescencia de la negociación” se ha trasladado del Consorcio al BM. En Gould y Winters (2007), así como en Pegg (2009) se sostiene que el caso del Chad es un caso paradigmático de obsolescencia de la negociación, y efectivamente puede serlo respecto el BM, pero no lo es respecto al Consorcio, que continúa operando en el país sin prácticamente interferencias³⁵.

5. Conclusiones

La teoría de la maldición de los recursos pone el acento en las disfunciones internas que provoca la llegada de una renta externa. Una de las limitaciones de esta teoría es el poco peso otorgado al papel de los actores externos, y en particular a las ETN. En el caso del Chad las empresas participantes del Consorcio en ningún momento han visto peligrar el flujo de petróleo. Aunque es cierto que el gobierno ha escenificado presiones al Consorcio, en realidad se trata más bien de reequilibrios de los términos de la negociación, leoninas en un principio (recordemos que las regalías se fijaron en un escaso 12,5%). A medida que aumente la capacidad financiera del gobierno, puede plantearse una posible entrada en el Consorcio (o en otros proyectos petroleros), en detrimento de alguna de las empresas actualmente participantes, pero ello difícilmente pasará sin que haya indemnizaciones. En suma, en el Chad el Consorcio ha sido el actor menos perjudicado por la caída del modelo.

El BM sin duda ha salido mal parado del fracaso del modelo. La ansiada redención de imagen que buscaba ligando la explotación del petróleo con la reducción de la pobreza, no se ha dado. La complejidad de meter en el mismo saco políticas y discursos tan complejos, controvertidos y poco contrastados, como la buena gobernanza, la gestión de una renta externa y la reducción de la pobreza, ha topado con un escenario en el que confluyan actores con intereses dispares y dinámicos (el gobierno, la rebelión, el Consorcio), y en el que también han aparecido aspectos incontrolables, como el elevado precio internacional del petróleo, que disparó la renta. Asimismo, tampoco son desdeñables las presiones a que se vio sometido el BM en 2006 por parte del gobierno de EEUU y Francia para que rebajara sus exigencias negociadoras con el gobierno de Déby, y que así se alcanzara una solución de compromiso ante la derogación de la Loi, lo que acabó convirtiéndose en el *Memorandum of Understanding*. El BM confió demasiado, quizás ingenuamente, en que el diseño del modelo resistiría posibles derivas del gobierno de Déby, sin tener en

³⁵ Por ejemplo, el 7 de noviembre de 2010, el propio ministro chadiano de infraestructuras, Adoum Younousmi, reconocía que el gobierno no tenía medios para controlar completamente la cantidad producida en los pozos de Doba (declaraciones a Radio France Internationale, <http://www.rfi.fr/emission/20101107-1-le-debat-africain-djamaena-gestion-manne-petroliere>).

cuenta su historial autoritario. La necesidad de que el modelo funcionara y las presiones externas empujaron al BM a descontar mal algunas variables.

Sin duda no es casual que el proyecto petrolero del Chad coincida con los intereses energéticos de EEUU, lo que añade otro elemento externo. El cambio de estrategia geoenergética que opera EEUU desde la primera Guerra del Golfo (1991), entre otras cosas contempla que vayan aumentando los suministros petroleros desde el Golfo de Guinea en detrimento del inestable Oriente Medio. Ello explica en parte la implicación del BM en el proyecto.

Continuando con los factores externos, es interesante observar como el caso del Chad viene a ilustrar la rivalidad estratégica de China y EEUU en África, y los contornos que ésta puede adoptar en tiempos venideros. En la actualidad el gobierno de Déby, como tantos otros en la región, facilita las operaciones de compañías petroleras chinas en nuevos proyectos petroleros, y empieza a plantearse un oleoducto que une las cuencas chadianas con el oleoducto sudanés (Muglad-Port Sudan, con capital mayoritario de CNPC).

Finalmente, y como metáfora de los efectos sobre el desarrollo del proyecto petrolero, en agosto de 2011, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Doba, la capital petrolera del país, organizaron una jornada de protesta (que fue ampliamente seguida), para reivindicar los recurrentes cortes de electricidad que sufre la ciudad, a pesar de contar con una central eléctrica financiada por el BM al amparo del proyecto petrolero (Mbaïdedji, 2011).

En suma, algunas de las predicciones de la teoría de la maldición de los recursos, en particular la corrupción y el reforzamiento de comportamientos autoritarios, pueden tener cierta cabida en el caso chadiano, pero deben ser también explicadas a partir de la presencia de elementos externos y de causalidades diferentes a las usualmente argumentadas. En definitiva, la inserción periférica del Chad en la economía mundial, apenas analizada en el contexto del proyecto petrolero, juega un papel decisivo a la hora de explicar las disfunciones que ha provocado el petróleo en el país. Ello hace que del mismo modo que hay maldecidos, también hay bendecidos, en particular las empresas del Consorcio y el entorno clientelar de Déby.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abrahamsen, R. (2001): *Disciplining Democracy. Development Discourse and Good Governance in Africa*, Zed Books, London.
- Amnesty International (2001): *Tchad: l'héritage Habré*, AFR 20/004/2001.
- Auty, R. (1993): *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*, Routledge, Londres.
- Auty, R. (2008): *Political Economy of African Mineral Revenue Deployment: Angola, Botswana, Nigeria and Zambia Compared*, WP 28/2008, Real Instituto Elcano, Madrid.
- Azevedo, M. (1998): *Roots of violence: A History of War in Chad*. Routledge, Londres.
- Azevedo, M. y Nnandozie, E. (1997): *Chad: a Nation in Search of its Future*, Boulder, Westview.
- Basedau M. (2005): *Context Matters. Rethinking The Resource Curse in Sub-Saharan Africa*. GIGA Working Papers, No. 1. German Institute of Global and Area Studies,
- Bayart, J. F. (2008): “Obscenité Franco-Tchadienne”, *Le Monde*, 18 de febrero de 2008.
- BBC News (2004): *Chad's oil watchdog 'powerless'*, 25 de mayo de 2004, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3748061.stm>
- Beblawi, H. y Luciani, G. (1987): *The Rentier State*, Croom Helm, New York
- Brunnschweiler, C. y Bulte, E. (2008): “The resource curse revisited and revised: A tale of paradoxes and red herrings”, *Journal of Environmental Economics and Management*, 55, 248-264.
- Carmody, P. (2009): “Cruciform sovereignty, matrix governance and the scramble for Africa’s oil: Insights from Chad and Sudan”, *Political Geography*, 28, 353-361.
- Carmody, P. (2011): *The New Scramble for Africa*, Polity Press, Cambridge.
- Collier, P. y Hoeffler, A. (1998): “On the Economic Causes of Civil War”, *Oxford Economic Papers*, 50, 563-573.
- Collier, P. y Hoeffler, A. (2004): “Greed and Grievance in Civil War”, *Oxford Economic Papers*, 56 (4), 563-595.
- Colom, A. (2005): “¿Un nuevo rumbo para las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en África?”, en Campos, A. (ed.) *Ayuda, mercado y buen gobierno. Los lenguajes del desarrollo en África en el cambio de milenio*, Icaria, Barcelona.
- Colom, A. (2008a): *Petróleo, gobernanza y conflicto en el Chad*, ARI 73/2008, Real Instituto Elcano, Madrid.
- Colom, A. (2008b): La nueva agenda del sistema de cooperación: ¿el fin del Consenso de Washington?, *Revista de Economía Mundial*, 18, 79-92.

- Colom, A. (2010): *Lessons from the Failure of Chad's Oil Revenue Management Model*, ARI 12/2010, Real Instituto Elcano, Madrid.
- Colom, A. (2011): "La iniciativa ITIE y sus limitaciones en África: el caso del Chad", en *Claves de la Economía Mundial 2011*, ICEX-ICEI, Madrid, en prensa.
- Corden, W. M. y Neary, J. P. (1982): "Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy", *The Economic Journal*, 92 (368), 825-848.
- Crisis Group (2009): "*Tchad: sortir du piège pétrolier*". Briefing Afrique No. 65.
- Daniele, V. (2011): "Natural Resources and 'Quality' of Economic Development", *Journal of Development Studies*, 47 (4), 545-573.
- Di John, J. (2007): "Oil Abundance and Violent Political Conflict: A Critical Assessment", *Journal of Development Studies*, 43 (6), 961-986.
- Di John, J. (2011): "Is There Really a Resource Curse? A Critical Survey of Theory and Evidence", *Global Governance*, 17, 167-184.
- EIU (2011): *State, Exxon-Mobil sign JV; will sell crude directly*, Viewswire, The Economist Intelligence Unit, 16 de febrero de 2011.
- EssoChad (2011): *Project Update No. 30. Mid-Year Report 2011*, http://essochad.com/Chad-English/PA/Files/30_allchapters_eng.pdf
- Gary, I. y Reisch, N. (2004): *Le pétrole tchadien: miracle ou mirage?* Catholic Relief Services y Bank Information Center, Washington.
- Global Witness (2011): *Civil society expresses vote of no confidence in conflict diamond scheme*, comunicado de prensa, 23 de junio, <http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/Press%20release%20KP%2020240611.pdf>
- Gould, J. A. y Sickner, C. (2008): "Making market democracies? The contingent loyalties of post-privatization elites in Azerbaijan, Georgia and Serbia", *Review of International Political Economy*, 15 (5), 740-768.
- Gould, J. A. y Winters, M. S. (2011): "Petroleum Blues: the Political Economy of Resources and Conflict in Chad", en Lujala, P. y Rustad S. A. (eds.): *High-Value Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding*, Environmental Law Institute, Washington.
- Gould, J. y Winters, M. (2007): "An Obsolescing Bargain in Chad: Shifts in Leverage between the Government and the World Bank," *Business and Politics*, 9 (2).
- Hansen, K. F. (2011a): *Chad's relations with Libya, Sudan, France and the US*, NOREF Report, Norwegian Peacebuilding Centre.
- Hansen, K. F. (2011b): *Military rebels in Chad. Changes since 2008*, NOREF Report, Norwegian Peacebuilding Centre.
- Harford, T. y Klein, M. (2005): "Aid and the Resource Curse", Public Policy for the Private Sector, World Bank, Note No. 291.
- Harrison, G. (2004): *The World Bank and Africa: The Construction of Governance States*. Routledge, London.

- Haslam, P. A. (2004): *The Bargaining Gap: Explaining the Stability of Domestic Foreign Investment Regimes and the Limitations on State-MNE Bargaining in a Globalized Economy*, 8th International Business Conference. Canadian Foundation for the Americas. Guadalajara, México.
- Hirschmann, A. O. (1958): *The Strategy of Economic Development*, Yale University Press, New Haven.
- Hirschmann, A. O. (1977): "A Generalized Linkage Approach to development, with Special Reference to Staples", *Economic Development and Cultural Change*, 25: Supplement, 67-98.
- Horta, K. y Nguiffo, S. (1998): *Open Letter to Mr. James D. Wolfensohn, President of the World Bank, from 86 NGOs in 28 Countries, Concerning the Chad/Cameroon Oil & Pipeline Project*, Africa Action, Washington.
- Horta, K., Nguiffo, S. y Djiraibe, D. (2007): *The Chad-Cameroon Oil & Pipeline Project. A Project Non-Completion Report*. Environmental Defense. Disponible en http://www.edf.org/documents/6282_ChadCameroon-Non-Completion.pdf.
- HSBA (2011): *Union des Forces de Résistance*, Sudan Human Security Baseline Assessment.
- IAG (2001): Final Report, Groupe International Consultatif-International Advisory Group, http://siteresources.worldbank.org/INTCAMEROON/Resources/IAG_Chad-Cameroon_Pipeline_Final_Report_Sept-3-2009.pdf
- IMF (2007): *Chad: Selected Issues and Statistical Appendix*, International Monetary Fund, Washington.
- IMF (2009): *Chad: Staff Monitored Program*, International Monetary Fund, Washington.
- IMF (2011): *Investment Objectives of Sovereign Wealth Funds. A Shifting Paradigm*, IMF Working Papers, WP/11/19, Washington.
- Karl, T. L. (1997): *The Paradox of Plenty. Oil Booms and Petro-States*, Berkeley, University of California Press.
- Karl, T. L. (2005): "Understanding the Resource Curse", en *Covering Oil: A Guide to Energy and Development*, Open Society Institute.
- Killick, T. (1996): "Principals, Agents and the Limitations of BWI Conditionality". *The World Economy*, 19 (2), 211-229.
- Kojucharov, N. (2007): "Poverty, Petroleum & Policy Intervention: Lessons from the Chad-Cameroon Pipeline", *Review of African Political Economy*, 34 (113), 477-496.
- Kolstad, I. y Wiig, A. (2009): "Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries?", *World Development*, 37 (3), 521–532.
- Lederman, D. y Maloney, W. F. (2007): *Natural Resources: Neither Curse nor Destiny*, Stanford University Press, Stanford.

- Mackintosh W. A. (1923): "Economic Factors in Canadian History", *Canadian Historical Review*, 4, 12-25.
- Mahdavy, H. (1970): "The Patterns and Problems of Economic Development The case of Iran", en M A Cook (ed), *Studies in the Economic History of Middle East*, Oxford University Press.
- Massey, S. y May R. (2006), R: The Crisis in Chad, *African Affairs*, 105/420, pp. 443-449.
- Massey, S. y May, R. (2005): Dallas to Doba: Oil and Chad, External Controls and Internal Politics, *Journal of Contemporary African Studies*, 23, 2, pp. 253-276
- Massey, S. y May, R. (2009): "Oil and War in Chad", in Southall, R. y Melber, H., op. cit.
- Matti, S. (2010): Resources and Rent Seeking in the Democratic Republic of the Congo, *Third World Quarterly*, 31 (3), 401-413.
- Mbaïdedji, F. N. (2011): Doba, capitale pétrolière dans le noir. *Tchad et Culture*, 299, septiembre. <http://www.cefed.org/spip.php?article2818>
- McFerson, H. M. (2009): Governance and Hyper-corruption in Resource-rich African Countries, *Third World Quarterly*, 30 (8), 1529-1547.
- Melber, H. y Southall, R. (eds.) (2009): *A New Scramble for Africa? Imperialism, Investment and Development in Africa*, University of KwaZulu Natal Press, Natal.
- Mobbs, P. M. (2011): "Chad", *2010 Minerals Yearbook*, US Geological Survey.
- Obi, C. (2009): "Scrambling for Oil in West Africa?", en Southall, R. y Melber, H. (eds.), *The New Scramble for Africa: Imperialism, Investment and Development in Africa*, University of KwaZulu Natal Press, Natal.
- Oskarsson, S. y Ottosen, E. (2010): "Does Oil Still Hinder Democracy?" *Journal of Development Studies*, 46 (6).
- Pegg, S. (2005): "Can Policy Intervention Beat the Resource Curse? Evidence From The Chad-Cameroon Pipeline Project", *African Affairs*, 105/418, pp. 1-25.
- Pegg, S. (2009): "Chronicle of a Death Foretold: The Collapse of the Chad-Cameroon Pipeline Project", *African Affairs*, 108/431, pp. 311-320.
- Petry, M. y Bambé, N. (2005): *Le pétrole du Tchad. Rêve ou cauchemar pour les populations*, Karthala, París.
- Prebisch, R. (1950): *The economic development of Latin America and its principal problems*, United Nations, New York.
- Ross, M. (2001): "Does Oil Hinder Democracy?", *World Politics*, 53, 325-361.
- Ross, M. L. (1990): The political economy of the resource curse. *World Politics*, 51 (2), 297-322.
- Runyan, C. (2000): "Chad/Cameroon oil pipeline moving forward", *World Watch*, 13 (4), 10.

- Sachs, J. y Warner, A. (1995): "Natural Resource Abundance and Economic Growth", *NBER Working Paper 5398*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Sachs, J. y Warner, A. (1999): Natural Resource Intensity and Economic Growth, in Mayer, J., Chambers, B. y Farooq, A. (eds.), *Development Policies in Natural Resource Economies*, Edward Elgar, Cheltenham.
- Same, A. T. (2009): *Transforming Natural Resource Wealth into Sustained Growth and Poverty Reduction. A Conceptual Framework for Sub-Saharan African Oil Exporting Countries*, Policy Research Working Paper 4852, World Bank Group, Washington.
- Singer, H. (1950): "The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries, *American Economic Review*, 40 (2), 473-485.
- Singer, H. y Edström, J. (1993): "The impact of trends and volatility in terms of trade on GNP growth", en Nissanke, M. y Hewitt, A. (eds.), *Economic Crisis in Developing Countries: New Perspectives on Commodities, Trade, and Finance*, Pinter, New York.
- Soares de Oliveira, R. (2007): *Oil and Politics in the Gulf of Guinea*, Columbia University Press, New York.
- Stevens, P. (2003): *Resource Impact - Curse or Blessing? A Literature Survey*, Centre for Energy, Petroleum, and Mineral Law and Policy, Dundee.
- Stiglitz, J. (2004): "We Can Now Cure Dutch Disease", *The Guardian*, 18 de agosto.
- Survie, Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, Les Amis de la Terre, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme y Organisation Mondial contre la Torture, 5 ONG dénoncent la recrudescence de l'insécurité au Tchad, comunicado de prensa, 8 de octubre de 2003, <http://survie.org/francafrique/tchad/article/5-ong-demoncent-la-recrudescence>
- The Economist (1977): "The Dutch Disease", *The Economist*, 26 de noviembre, 82-83.
- UNCTAD (2009): *World Investment Report*, United Nations Conference on Trade and Development, Ginebra.
- UNDP (2000): *Human Development Report*, UNDP, Nueva York.
- Vernon, R. (1971), *Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises*, Basic Books, New York.
- Wick, K. y Bulte, E. (2009): "The Curse of Natural Resources", *Annual Review of Resource Economics*, 1, 139-155.
- Winters, M. S. y Gould, J. A. (2011): "Betting on Oil: The World Bank's Attempt to Promote Accountability in Chad", *Global Governance*, 17, 229-245.
- World Bank (2002): *Treasure or Trouble: Mining in Developing Countries*, World Bank Group, Washington.

Xinhua News (2011): *Tchad : la raffinerie SRN confrontée à des difficultés*, 29 de septiembre de 2011, http://french.news.cn/afrique/2011-09/29/c_131166807.htm.

Yates, D. A. (1996): *The Rentier State in Africa: Oil Rent Dependency and Neocolonialism in the Republic of Gabon*, Africa World Press, Trenton.

Últims documents de treball publicats

NUM	TÍTOL	AUTOR	DATA
10.02	Memory in Contracts: The Experience of the EBRD (1991-2003)	Lionel Artige, Rosella Nicolini	Març 2010
10.01	Language knowledge and earnings in Catalonia	Antonio Di Paolo, Josep Lluís Raymond-Bara	Febrer 2010
09.12	Inflation dynamics and the New Keynesian Phillips curve in EU-4	Borek Vasicek	Desembre 2009
09.11	Venezuelan Economic Laboratory The Case of the Altruistic Economy of Felipe Pérez Martí	Alejandro Agafonow	Novembre 2009
09.10	Determinantes del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2007)	Vicent Alcántara Escolano, Emilio Padilla Rosa	Novembre 2009
09.09	Heterogeneity across Immigrants in the Spanish Labour Market: Advantage and Disadvantage	Catia Nicodemo	Novembre 2009
09.08	A sensitivity analysis of poverty definitions	Nicholas T. Longford, Catia Nicodemo	Novembre 2009
09.07	Emissions distribution in postKyoto international negotiations: a policy perspective	Nicola Cantore, Emilio Padilla	Setembre 2009
09.06	Selection Bias and Unobservable Heterogeneity applied at the Wage Equation of European Married Women	Catia Nicodemo	Juliol 2009
09.05	La desigualdad en las intensidades energéticas y la composición de la producción. Un análisis para los países de la OCDE	Juan Antonio Duro Moreno, Vicent Alcantara Escolano, Emilio Padilla Rosa	Maig 2009
09.04	Measuring intergenerational earnings mobility in Spain: A selection-bias-free approach	Maria Cervini Pla	Maig 2009
09.03	Monetary policy rules and inflation process in open emerging economies: evidence for 12 new EU members	Borek Vasicek	Maig 2009
09.02	Spanish Pension System: Population Aging and Immigration Policy	Javier Vázquez Grenno	Abril 2009
09.01	Sobre los subsistemas input-output en el análisis de emisiones contaminantes. Una aplicación a las emisiones de CH4 en Cataluña	Francisco M. Navarro Gálvez, Vicent Alcántara Escolano	Març 2009
08.10	The monetary policy rules in EU-15: before and after the euro	Borek Vasicek	Desembre 2008